



Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



ORDEN

NÚMERO **2604/2025**

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Expte.: **052/2026**

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

En virtud de lo que establece el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

DISPONGO

Acordar el inicio y tramitación del expediente correspondiente al contrato de servicios denominado **“GESTIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ACOGIDA TEMPORAL (PISO TUTELADO Nº 3) PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”** a propuesta de la Dirección General de la Mujer, cuya adjudicación se efectuará mediante tramitación ordinaria por procedimiento abierto y pluralidad de criterios, al amparo de lo previsto en los artículos 131 y 146.2 de la mencionada Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, justificando su necesidad en los siguientes motivos.

Nuestra sociedad sigue teniendo que hacer frente a retos fundamentales para alcanzar la igualdad real y efectiva. A pesar de que la igualdad está reconocida en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, y de los significativos progresos hechos en los últimos años, persisten discriminaciones, que en sus formas más extremas son las que padecen las mujeres víctimas de violencia.

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, tiene por objeto prevenir y combatir la Violencia de Género en sus diferentes causas, formas y manifestaciones, así como garantizar la asistencia y protección de las víctimas, con medidas de carácter integral. Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley, las agresiones sexuales y abusos sexuales contra la mujer.

El Decreto 241/2023, de 20 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, modificado por Decreto 107/2024, de 4 de diciembre, del Consejo de Gobierno, atribuye en su artículo 9 a la Dirección General de la Mujer, en materia de asistencia a las víctimas, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, entre otras, las siguientes competencias:

- a) La adopción de medidas dirigidas a prevenir y erradicar cualquier manifestación de la violencia que se ejerce sobre las mujeres, sus hijos e hijas y otras personas dependientes de ellas, trabajando coordinadamente con todas las administraciones públicas implicadas.
- c) La adopción de medidas de atención integral a través de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género y de la Red de Centros y Servicios para Mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid, con especial atención a aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, sin perjuicio de las

competencias atribuidas a la red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delito de la Comunidad de Madrid.

La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de género de la Comunidad de Madrid establece una especial protección para algunos colectivos de víctimas de violencia de género que entiende como especialmente vulnerables, y menciona expresamente a las mujeres con discapacidad.

A este respecto, el artículo 2.3.a), para el caso de las mujeres con discapacidad señala que están incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley, las agresiones físicas o psíquicas ejercidas por hombres de su entorno familiar o institucional, aunque no tengan la condición de cónyuge o persona con la que esté o haya estado ligada por análoga relación de afectividad, aún sin convivencia.

La misma Ley, en su artículo 15, enuncia el principio de efectividad entre las *“Medidas de asistencia integral y protección a las víctimas de violencia de género”*, de la siguiente forma: *“Se adoptarán las medidas necesarias para que tengan garantizado el ejercicio efectivo de sus derechos las víctimas cuyas circunstancias personales y sociales supongan una mayor dificultad para el acceso integral a la asistencia y, en especial, las mujeres inmigrantes, con independencia de su situación administrativa, y las mujeres con discapacidad.”*

Diversos factores personales, familiares y sociales confluyen en las mujeres con discapacidad, dificultades de aprendizaje y de comunicación, y que determinan que se conviertan en un grupo con un altísimo riesgo de sufrir algún tipo de violencia, superando ampliamente los porcentajes de malos tratos que se barajan respecto de las mujeres sin discapacidad y ello, por los siguientes motivos:

- Por el hecho de ser menos capaces de defenderse físicamente del agresor, por su mayor dependencia de la asistencia y cuidados de otros. El propio cuidador ejerce, así, de barrera, en su relación con el exterior.
- Por miedo a denunciar el abuso, por la posibilidad de la pérdida de los vínculos y la provisión de los cuidados que necesita para el desenvolvimiento de su vida diaria.
- Por tener mayores dificultades para expresar los malos tratos sufridos, debido a problemas de comunicación.
- Por la dificultad de acceso a los puntos de información y asesoramiento, principalmente debido a la existencia de todo género de barreras de comunicación e incomprensión.
- Por tener una más baja autoestima y el menosprecio a su imagen como mujer.
- La sobreprotección familiar es mayor en el caso de las mujeres con discapacidad intelectual y se convierte, a veces, en un freno importante para su incorporación al empleo y para su autonomía personal.
- Al ser menos habitual que trabajen fuera de casa, esta circunstancia las aísla en el ámbito doméstico e incrementa sus posibilidades de sufrir dependencia económica respecto de su agresor.
- Por tener una menor credibilidad a la hora de denunciar hechos de este tipo ante algunos estamentos sociales y judiciales.

De acuerdo con el diseño establecido por la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de género de la Comunidad de Madrid, en su artículo 16.1, “la Comunidad de Madrid, a través del órgano competente en materia de mujer, dispondrá de los siguientes dispositivos para

dar acogida temporal a las víctimas de Violencia de Género”. En la letra c) se definen los pisos tutelados como los recursos especializados que ofrecerán alojamiento y seguimiento psicosocial a las mujeres que han finalizado el proceso de atención en un Centro de Acogida y que continúan precisando de apoyo en la consecución de su autonomía personal.

En cumplimiento de la obligación de desarrollar una atención especializada, el dispositivo de acogida temporal (PISO TUTELADO Nº 3) para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia, cuya gestión se licita, se configura como un recurso especializado, cuya finalidad es prestar alojamiento y seguimiento psicosocial a las mujeres que precisen apoyo. para la consecución de una vida independiente, una vez recuperadas de las secuelas de la violencia sufrida. La capacidad de atención de este dispositivo de acogida temporal se establece en 4 plazas.

Actualmente, la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid cuenta con dos pisos tutelados para mujeres con discapacidad intelectual víctimas de violencia de género. Uno de ellos está destinado específicamente a mujeres jóvenes víctimas de violencia de género con discapacidad y permite a estas mujeres estar acompañadas por sus hijos menores de edad a cargo pero fija unos límites de edad. El otro, es el que constituye el objeto de este contrato, y en cuanto a edad solo establece como requisito la mayoría de edad.

Por lo que se refiere a la subcontratación, se admite la misma en el presente expediente en las prestaciones accesorias que no estén directamente relacionadas con el objeto del contrato (servicio de limpieza, elaboración de menús, mantenimiento, seguridad, vigilancia y supervisión externa del equipo profesional, en su caso) siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 215 de la LCSP, quedando obligados al cumplimiento de los requisitos y obligaciones establecidos en el artículo 216 y 217 del mismo texto legal.

En el presente contrato de servicios, se consideran tareas críticas las relacionadas directamente con la atención especializada que se proporciona a las personas usuarias del recurso.

Esta limitación se justifica en el estricto control que el adjudicatario debe ejercer sobre la atención directa desarrollada por los profesionales que deben atender este recurso, como parte esencial del servicio que se contrata, y por la especial protección de las personas usuarias del mismo, en su condición de víctimas de violencia de género.

Tal control se garantiza si la relación de la empresa contratista sobre el personal directamente adscrito a la prestación principal del contrato, es la definida en el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre), y los servicios prestados por las personas profesionales quedan estrictamente dentro de su ámbito de organización y dirección.

El incumplimiento de esta limitación en materia de subcontratación será causa de resolución del contrato. En todo caso, el contratista asumirá la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración.

En otro orden de cosas, por lo que respecta al plazo de garantía, dada la naturaleza y las características del presente contrato, cuyo objeto es la prestación de un servicio de carácter social, no procede el establecimiento de un plazo de garantía, por considerarse que antes de proceder a la recepción del contrato, se han tenido que cumplir las prescripciones técnicas del servicio, no pudiendo derivarse con posterioridad, dada la naturaleza del contrato, vicios o defectos que puedan quedar garantizados (artículo 210.3 del LCSP).

Se puede calificar este contrato como de tracto sucesivo y no de resultado, lo que, unido a la naturaleza de sus prestaciones, constituye un supuesto de excepción recogida en el artículo 210.3 de la LCSP, no siendo necesario el establecimiento de un plazo de garantía.

Por todo ello se considera oportuno, iniciar el expediente para la tramitación del contrato de servicios para la “GESTIÓN DE UN DISPOSITIVO DE ACOGIDA TEMPORAL (PISO TUTELADO Nº 3) PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID”, considerándose el tipo contractual adecuado para satisfacer las necesidades descritas, de acuerdo con la definición dada por el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Madrid,
a fecha de firma

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 3147/2023, de 5 de diciembre, BOCM nº 304, de 22/12/2023)
LA DIRECTORA GENERAL DE LA MUJER
(P.R. Resolución 3295/2025, 15 de julio de 2025)
LA SUBDIRECTORA GENERAL DE PREVENCIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS

Firmado digitalmente por: DE VICENTE JIMENEZ MARIA DEL MAR
Fecha: 2025.08.04 10:50